Escuela Judicial. Proyecto México de Julio César Vázquez-Mellado

(Vázquez-Mellado García, Julio César, *Escuela Judicial. Proyecto México*, Tirant Lo Blanch, 2016, 371 pp.)

Exponer un tema respecto de una escuela especializada, como lo es Instituto de la Judicatura Federal, es un acto que conlleva una gran responsabilidad y, además, requiere de la experiencia de estar ahí, justamente en el terreno en el que este Instituto despliega todo su andamiaje.

En ese contexto, en la obra que se presenta, el doctor Julio César Vázquez-Mellado García realiza una obra seria y propositiva sobre diversos aspectos que rodean a la escuela judicial más importante de México, el Instituto de la Judicatura Federal, cuyo rol ha sido evolutivo y seguirá transformándose para preparar y capacitar a mejores funcionarios judiciales.

La tarea, como es sabido, no es fácil; los retos día a día se incrementan por la constante movilidad de la sociedad y por el dinamismo del derecho, pero los pasos que ha dado han sido firmes para consolidar a dicha institución como una escuela especializada por excelencia, impregnada de liderazgo y objetivos firmes.

Ahora bien, para conocer un poco de la esencia del Instituto de la Judicatura Federal, también es necesario caminar sobre algunos temas que le preceden y es aquí donde el autor de la obra nos transporta a lo que llama los principales cauces por los que ha discurrido la transmisión del conocimiento y de la experiencia en materia judicial y nos menciona que en Roma es donde surgió el derecho como disciplina práctica y, consecuentemente, donde se originó el oficio de juzgar, entendiendo por tal la actividad de carácter interpretativo o hermenéutico en la cual es a los hombres y no a los dioses a quienes corresponde realizar el acto de justicia, sea distribuyendo bienes, adjudicando títulos o restituyendo derechos y libertades.

Nos menciona el autor cómo surgieron las escuelas judiciales modernas que tienen como uno de sus primeros antecedentes el Judicial Research Institute de Japón, creada en 1939 y transformada años después en Legal Training

and Research Institute, en el que realizaban tareas formativas y de investigación. También nos señala el surgimiento de otras escuelas judiciales, por ejemplo, en la década de los cuarenta se creó en España la Escuela Judicial, pero fue hasta 1950 cuando abrió sus cursos. Ocho años más tarde apareció en Francia el Centre National d'Études Judiciaires, que luego se convertiría en la actual École Nationale de la Magistrature. Estados Unidos abrió su escuela judicial en 1965, creando la National Judicial College of the State Judiciary, transformada en The National Judicial College.

A partir de la creación de las escuelas judiciales surgió la idea de la formación judicial, y precisamente el autor nos menciona que estos centros de estudio se han convertido en un vehículo importante para mejorar la calidad de la justicia, a partir de la profesionalización cada vez más esmerada y puntual de los funcionarios que participan en su realización efectiva y que pueden ser consideradas centros de investigación vinculados a la docencia, empero con una peculiaridad: la investigación en una escuela judicial no tiene la finalidad de cultivar la ciencia por la ciencia misma, sino en cuanto sirve a un propósito práctico, que es el de formar funcionarios judiciales cualificados y con una serie de habilidades que apuntan siempre a un mayor profesionalismo en la prestación del servicio.

Por lo que corresponde al Instituto de la Judicatura Federal, el doctor Vázquez-Mellado manifiesta que tiene diversos antecedentes, como las academias teórico-prácticas que surgieron en el siglo XVII, con desarrollo en el siglo XIX, en las cuales se empezó a enseñar la ley y no el derecho, es decir, los ordenamientos del reino y no la ciencia prudencial de los antiguos juristas, entrando en una colisión y que el derecho positivo terminó por desplazar de la universidad al científico de origen romano, es decir, al argumentativo o prudencial. Además, narra cómo es que diversos ciclos de la historia mexicana tuvieron impacto en el Poder Judicial y, por supuesto, en la formación de jueces, pues da cuenta desde el Porfiriato, donde sostiene que prácticamente los jueces mantenían una línea de corrupción o de empatía partidista, hasta la época en que en el periodo del presidente Ernesto Zedillo se abrieron los cauces para una verdadera modernización del sistema judicial y, por ende, una mayor independencia por cuanto se establecieron las bases para elevar el nivel académico, intelectual y profesional de los jueces.

Surge así, en un inicio, el Instituto de Especialización Judicial, creado por iniciativa del Ministro Agustín Téllez Cruces, entonces presidente de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación. Este instituto se instituyó en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 30 de diciembre de 1977 y tuvo diversos periodos.

De la misma manera, nos menciona el autor que la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación de 31 de diciembre de 1994 marcó un antes y un después para la Escuela Judicial, pues en ella se plantearon modificaciones profundas que incidieron en su conformación, debido, entre otras cosas, al establecimiento del Consejo de la Judicatura Federal y la inclusión de la carrera judicial en el texto de la Ley Fundamental. Estos cambios se reflejaron a su vez en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se sentaron las bases del Instituto de la Judicatura Federal como lo conocemos en la actualidad. En ese sentido destaca que en el proyecto se sitúan en el mismo plano las palabras preparación, selección y nombramiento, lo cual no es mera coincidencia ni un simple modo de enunciar los fines de la institución que se pretendía crear y que en realidad obedecía a una noción de escuela judicial generalmente compartida en el mundo moderno, consistente en separar el acceso a los cargos del nombramiento necesario para ejercerlos.

De forma posterior, el autor nos narra los diversos periodos de gestión del Instituto de la Judicatura Federal, comenzando en 1995-1999, a cargo del magistrado César Esquinca, seguido del periodo 1999-2004, donde el doctor Vázquez-Mellado se hizo cargo de la dirección general del Instituto, continuando en 2004, con un interinato, que daría paso al siguiente periodo 2004-2010, donde fungió como director el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta, el diverso periodo 2011-2012, a cargo de magistrado Leonel Castillo González como Director y el periodo iniciado en 2013, donde volvió a tomar la dirección del Instituto.

En la descripción de estos periodos el autor menciona muchas de las actividades que realiza el Instituto de la Judicatura Federal, y concluye que para el lapso iniciado en 2013 había algunas preocupaciones, una de ellas era el fortalecimiento del claustro de profesores y especialmente a la formación de los que se podría llamar una cadena de valor académico.

Otra de sus preocupaciones, y en conexión directa con la labor de investigación, era la necesidad de contar con una importante labor de publicación de material impreso y electrónico que contribuyera de manera directa al enriquecimiento cultural de los profesores y alumnos del Instituto, así como del público en general. Por ello manifiesta que es necesario fortalecer la línea editorial

del instituto, lo cual se ha hecho con la publicación de diversos documentos, además de que se ha mantenido la elaboración y publicación de la Revista del Instituto de la Judicatura Federal, labor que implica un enorme esfuerzo, pues conlleva múltiples tareas, que van desde la formación editorial y corrección de estilo hasta los diseños de publicación, registros internacionales y muchas otras exigencias.

También es su preocupación la evaluación de los aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial de la Federación a través de exámenes de aptitud para las categorías de actuario y secretario, y de los concursos de oposición para la designación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito en las distintas materias.

Otro de los puntos que señala el doctor Vázquez-Mellado es el referente a la relación del Instituto de la Judicatura Federal con la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y la Organización Internacional para la Formación Judicial, y señala que fue en un ambiente de transformación y de cambios profundos en diversos ámbitos de la cultura jurídica cuando tuvo lugar el segundo encuentro iberoamericano de Consejos de la Judicatura, celebrado en Barcelona los días 23 a 25 de marzo de 2001, en donde los presidentes de las Cortes Supremas de México, República Dominicana, Costa Rica y España, crearon la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, de la cual el Instituto de la Judicatura Federal fue miembro fundador, además, en su primer periodo como director le correspondió representar al Instituto de la Judicatura Federal en las reuniones que dieron vida a la hoy prestigiosa Organización Internacional para la Formación Judicial (The International Organization for Judicial Training, IOJT) entidad internacional que a nivel mundial reúne a las escuelas judiciales y promueve su cooperación para fortalecer el Estado de Derecho.

En el ámbito internacional, en el capítulo que denomina como “la escuela judicial en perspectiva comparada” expone cómo diversos modelos de escuela desarrollados en Francia, Italia y España han sido adaptados para el diseño de las escuelas e institutos de formación de la mayor parte de los países de América Latina y para señalarnos algunos ejemplos nos menciona los casos de Perú y Uruguay.

En ese capítulo relata de manera completa cómo es el funcionamiento de las escuelas judiciales y hace cierto énfasis en la autonomía que las caracteriza o en el marco normativo, cuestión que, como se verá más adelante, es de mucha importancia.

En el penúltimo capítulo de la obra se exponen ideas de la carrera judicial, en específico, del juez y su identidad, que en palabras del autor nos lleva a sopesar la correspondencia que hay entre lo que de él se espera según modelos ideales, deónticos o normativos, e incluso códigos de ética profesional, y lo que en realidad es, según prácticas y leyes que rigen su actividad, y que quizás habría que replantear en aras del fortalecimiento de la independencia judicial frente al poder.

También se expone que según algunos doctrinarios contemporáneos e incluso algunos sociólogos del derecho, es posible identificar al menos tres modelos de selección de funcionarios federales: “político”, “profesionalizado o de carrera” y “mixto” y que para dar una respuesta más adecuada a las exigencias de transparencia y veracidad, se ha desarrollado en México el “modelo profesionalizado” o de “carrera”, que se basa en la valoración y calificación de conocimientos y habilidades de los candidatos a ejercer los cargos en el sistema judicial, y sólo cuando éstos son probados es posible recibir el nombramiento formal.

Por ello, insiste, es necesario que los procesos de selección y designación de funcionarios sigan la misma lógica de los demás procesos de sistematización, es decir, que se eviten hibridismos entre razones políticas y razones epistemológicas, y se decante el proceso por lo que más conviene a su funcionamiento integral, que es el de la profesionalización de los funcionarios o carrera judicial.

También en este capítulo es muy importante lo que manifiesta el autor en el sentido de que las competencias de la escuela judicial no pueden considerarse como una “delegación” en sede administrativa de facultades y atribuciones del Consejo hacia el Instituto, ya que, en sentido estricto, éste no es titular de las competencias académicas sino que el legislador le ha otorgado estas atribuciones directamente; entonces, es de concluir que las competencias otorgadas al Instituto no son derivadas del Consejo de la Judicatura Federal.

Entonces, sostiene que existe una relación orgánica-funcional entre el Consejo y el Instituto basada en la atribución expresa de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que un conjunto de competencias (técnico-académicas) sean ejercidas en régimen de autonomía (técnica) por el segundo. Asimismo, destaca la protección legal a las competencias técnicas del mismo Instituto, atribuyéndole funciones definitivas y estables que, por otro lado, no pueden estar sujetas a la disposición o modificación por vía reglamentaria o del acuerdo general por parte del Consejo de la Judicatura Federal.

En el último capítulo nos explica el doctor Vázquez-Mellado las “actividades académicas” que jurídicamente están encomendadas al Instituto de la Judicatura Federal y se dirigen a la “educación especializada” de los miembros de la “carrera judicial”.

Así, la escuela judicial ha ido definiendo su perfil con la adopción de programas, lineamientos, políticas, herramientas, procesos, resultados y evaluaciones altamente especializados, quedando de ese modo más clara la diferencia con la educación que imparten las instituciones de educación superior desde necesidades, objetivos y fines generales del derecho.

Por ello —expone— se hace necesario evaluar y replantear algunos aspectos del “modelo educativo judicial” que se ha adoptado en México, pues de esa manera se estará en condiciones de identificar fallas en el sistema o detectar aspectos en los que podrían llevarse a cabo algunos ajustes para conseguir un mejor funcionamiento institucional.

Sugiere que es necesario evitar una práctica que suele ser común en México y en gran parte de los países latinoamericanos: la asistematicidad legislativa, especialmente en materia administrativa, lo que en otras palabras es la que se produce cuando se realizan reformas fragmentarias con las que se busca modificar las funciones o los esquemas de trabajo institucional, las cuales, al no contar con un esquema de política regulatoria o con un programa en el que se recojan y jerarquicen los objetivos generales de la institución, producen una suerte de retaceado normativo poco comprensible.

Derivado de su propia experiencia personal y también de la información generada dentro del propio Instituto de la Judicatura Federal, el autor nos brinda lo que para él es su modelo de escuela judicial.

Para comenzar, expone que es necesario realizar un esfuerzo para diseñar planes de estudio desde una perspectiva multidisciplinaria, lo cual implica romper con ciertos moldes de inteligibilidad preexistentes para dejar el paso libre a lo que se ha denominado restauración de las significaciones humanas del conocimiento, lo que significa que la interdisciplinariedad no sólo consiste en reunir a varios especialistas y establecer un acuerdo diplomático entre las distintas visiones, sino en adoptar un horizonte global para comprender lo universal como totalidad.

Otro de los aspectos de su modelo de escuela judicial redundan en aplicar lo que denomina como *compliance* o, en castellano, política del cumplimiento regulatorio, que se trata de una práctica de gobierno consistente en que cada

organización o institución se haga cargo de elaborar sus planes de estudio, sus currículos y su propio esquema reglamentario, pero cumpliendo con una certificación que hace un organismo supranacional previa comprobación del cumplimiento de ciertos estándares de calidad educativa.

En este sentido —expone— existe la necesidad de suplir vacíos institucionales u organizativos fortaleciendo la figura del juez como funcionario confiable, entendiendo por tal aquel que es competente y capaz para desempeñar el oficio atendiendo a cambios estructurales y funcionales.

En torno al modelo educativo, el autor narra que la escuela judicial incide en el “saber conocer”, “saber hacer” y “saber ser” que se encuentran directamente alineados con las funciones legales encomendadas al Instituto de la Judicatura Federal para formar a los miembros del Poder Judicial de la Federación y que es necesario que las actividades del Instituto partan de una guía diseñada de acuerdo al sistema de competencias (conocimientos-habilidades-actitudes), por ello sugiere la creación de una hoja de ruta en la que se establezcan con claridad sus funciones académicas a partir del análisis de cada uno de los elementos (estudiante-currículo-docente-administración) que integran el proceso de aprendizaje (sistema).

Así, afirma que en la medida en que exista una coherencia entre ingreso-permanencia-egreso será la forma en que se abonará al cumplimiento de la calidad del programa formativo y en la justificación de la existencia de una “escuela judicial”.

En otro punto, relata el autor que el currículo de la escuela judicial debe enfocarse en el desarrollo de competencias, en virtud de que forma parte vertebral del modelo educativo al ser la base para diseñar, ejecutar, evaluar y ajustar los respectivos planes o programas de estudios del funcionario jurisdiccional.

Por otra parte, dice que la intervención del docente resulta fundamental para lograr buena parte de los objetivos y metas del modelo educativo. De ahí que también sea preceptivo diseñar un perfil docente de “escuela judicial” para seguir la coherencia del modelo específico.

En otro contexto, también precisa que el reto actual que enfrenta el Instituto consiste en iniciar un proceso de evaluación de sus funciones académicas para medir su calidad, de tal manera que le permita identificar su posición entre “las escuelas judiciales”, con lo que conseguiría hacer patente la calidad de sus programas de estudios oficiales respecto de los estándares nacionales e internacionales de evaluación de la calidad educativa.

Finalmente, en su relatoría, el doctor Vázquez-Mellado señala que en los espacios comunes es necesario que haya una adecuada coordinación interinstitucional que permita desplegar un modelo educativo de “escuela judicial” uniforme en todo el territorio nacional y que el reto radica en el trabajo de concientización entre las diversas “escuelas judiciales” en México sobre los beneficios, las ventajas y las oportunidades de una vertiente nacional de “escuela judicial”.

No cabe duda que todo lo expuesto en la obra que se presenta nos lleva a realizar muchas reflexiones sobre la labor tan noble que realiza el Instituto de la Judicatura Federal al formar, capacitar y actualizar a los funcionarios judiciales, así como a los particulares que deseen incorporarse al Poder Judicial de la Federación, tarea que no es nada fácil, pues los cambios en la sociedad y en el derecho en sí hacen que sus objetivos vayan cambiando con el transcurso del tiempo.

Además, independientemente de los retos académicos que tiene como institución educativa, está la gran carga de ser, en toda la extensión de la palabra, la mejor escuela judicial en México, lo que provoca que todo curso o actividad que emprenda deba ser realizada con una actitud de liderazgo y sobre todo, de compromiso ante la sociedad.

Víctor Hugo Hiram Magallanes Martínez